



**JUZGADO DÉCIMO (10º) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	11001333501020180024800
Medio de control	EJECUTIVO
Ejecutante	BENJAMÍN DE JESÚS SÁNCHEZ GRANADOS (Q.E.P.D.)
Demandado	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la entidad ejecutada contra el auto de 28 de julio 2022, por medio del cual se libró mandamiento de pago dentro del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 28 de julio de 2022¹, el Despacho reconoció a la señora Bertha Isabel Ruiz Peña, como sucesora procesal del señor Benjamín de Jesús Sánchez Granados (Q.E.P.D.), quien actuaba como parte ejecutante.

En providencia de la misma fecha², el Juzgado repuso el auto de 17 de noviembre de 2021, y libró mandamiento de pago contra de la UGPP, en la forma que consideró legal por los intereses moratorios en suma de **\$15.417.492**.

Contra la anterior decisión, el apoderado de la UGPP interpuso recurso de reposición el 3 de agosto de 2022³, argumentando lo siguiente:

i) Que a través de la Resolución ADP 01603 del 8 de abril de 2022, la entidad liquidó los intereses por la suma de **\$14.004.262.74**, los cuales están pendientes de pago hasta que se aporte escritura pública o sentencia de sucesión por parte de los interesados. Así mismo, indicó que dentro del cuaderno administrativo del causante no obra petición por parte de beneficiarios que pretendan el cumplimiento del proceso ejecutivo en calidad de herederos.

ii) Que los intereses se calcularon sobre las mesadas indexadas causadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa (9 de mayo de 2013), y el periodo de cálculo va de la ejecutoria hasta la fecha efectiva de pago (para el caso octubre-2013), habida cuenta de las interrupciones o suspensión de causación de intereses, según las reglas y la normatividad aplicable al particular.

¹ Expediente electrónico archivo: 009. AUTO RESUELVE SOBRE SOLICITUD DE SUCESIÓN PROCESAL

² Ibid. archivo: 010. AUTO RESUELVE REPOSICIÓN - LIBRA MANDAMIENTO

³ Ibid. archivo: 011. RECURSO CONTRA MANDAMIENTO.

iii) Que la suma a pagar por intereses moratorios, asciende a \$14.004.262,74, teniendo en cuenta como fecha de solicitud la de radicación en debida forma de la totalidad de documentos requeridos para el pago, por parte del demandante o su apoderado, o la solicitud de cumplimiento al fallo por parte de éstos, antes del término legal, la suspensión de causación de intereses moratorios desde el mes séptimo posterior a la ejecutoria, y el periodo de liquidación de Cajanal, así como los demás parámetros y procedimientos establecidos internamente para la definición de la tasa de interés y el cálculo de los intereses moratorios, de conformidad con las directrices de la UGPP.

iv) Aunado a lo anterior, propuso las excepciones de: a) inexistencia del demandante o del demandado, b) incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, c) no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar, d) no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

Lo anterior, bajo el argumento de que si bien en auto del 28 de julio de 2022, se reconoció a la señora Bertha Isabel Ruiz Peña como sucesora procesal, lo cierto es que para que la unidad realice el pago debe aportarse escritura pública o sentencia de sucesión por parte de los interesados, por lo que sin sucesión, existen limitaciones para realizar el pago a través del SIIF y para poder hacer el pago de dichos recursos se requiere que la DIAN revise si existe alguna deuda fiscal, como conducto regular, so pena de infracciones de índole disciplinaria y fiscal, por lo que no es posible realizar un depósito judicial, (como cumplimiento al pago) debido a que el SIIF exige que se tenga claramente identificado al beneficiario.

Del recurso se corrió traslado conforme al artículo 110 del C.G.P.⁴, frente al cual el apoderado de la parte ejecutante guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Respecto a la liquidación de los intereses moratorios.

En primera medida, se advierte que en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá el 28 de mayo de 2012, se accedió a las pretensiones de la demanda, y se ordenó reliquidar la pensión del señor Benjamín de Jesús Sánchez Granados, con el 75% del promedio mensual de los factores salariales devengados durante el último año anterior al retiro del servicio, esto es, entre el 1° de septiembre de 2005 al 30 de agosto de 2006, y se ordenó a Cajanal hoy UGPP, dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia proferida el 9 de abril de 2013.

Conforme a las pruebas que obran en el expediente se tiene acreditado que a través de Resolución RDP 38115 del 20 de agosto de 2013, se dio cumplimiento al fallo y

⁴ Ibid. archivo: 012. TRASLADO RECURSO

se reliquidó la pensión de vejez del señor Benjamín de Jesús Sánchez Granados, elevando la cuantía de esta a la suma de \$2,110,319.00, efectiva a partir del 1° de septiembre de 2006.

A través de la Resolución ADP 01603 del 8 de abril de 2022, la UGPP liquidó los intereses por la suma de \$14.004.262.74. Sin embargo, la entidad indicó que estos están pendientes de pago hasta que se aporte escritura pública o sentencia de sucesión por parte de los interesados.

La UGPP alega que los intereses moratorios se calcularon sobre las mesadas indexadas causadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia declarativa (9 de mayo de 2013), y el periodo de cálculo va de la ejecutoria hasta la fecha efectiva de pago (octubre de 2013), teniendo en cuenta la radicación en debida forma de los documentos requeridos para el pago, la solicitud de cumplimiento al fallo, la suspensión de causación de intereses moratorios desde el mes séptimo posterior a la ejecutoria, y el periodo de liquidación de Cajanal, así como los demás parámetros y procedimientos establecidos internamente para la definición de la tasa de interés y el cálculo de los intereses moratorios, conforme a las directrices de la entidad, lo cual arrojó un valor de \$14.004.262.74.

Ahora bien, el Despacho realizó la liquidación de los intereses moratorios conforme a los criterios establecidos en la sentencia del 28 de mayo de 2012, teniendo en cuenta: i) Que como consecuencia de la reliquidación la pensión de vejez se elevó a la suma de \$2,110,319.00, efectiva a partir del 1° de septiembre de 2006, ii) Que la sentencia quedó ejecutoriada el 9 de mayo de 2013, iii) Que la solicitud de cumplimiento del fallo se radicó el 30 de agosto de 2013, y iv) Que conforme a la Resolución RDP 38115 del 20 de agosto de 2013, en el mes de octubre de 2013, la UGPP efectuó el pago del retroactivo de las mesadas pensionales y la indexación al ejecutante por valor de \$131.326.492.09, sin que se hiciera reconocimiento alguno por concepto de intereses moratorios, y v) Que en la sentencia base del título ejecutivo, se ordenó dar cumplimiento a la misma en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

En ese orden de ideas, en la providencia recurrida se estableció que el saldo pendiente por pagar a la fecha por la entidad ejecutada conforme a las órdenes dadas en las providencias del 28 de mayo de 2012 y 9 de abril de 2013, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente; asciende a la suma de **\$15.417.492.00**, y no a \$14.004.262.74 como arguye la entidad ejecutada. Lo anterior debido a que, la suma a la que arribó el Despacho corresponde a los intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se realizó el reconocimiento y pago del retroactivo generado por la reliquidación de la pensión y la indexación, en cumplimiento de las órdenes judiciales que sirven como título ejecutivo.

Al revisar la liquidación realizada por la entidad, se evidencia que ésta difiere de la elaborada por el Juzgado, porque la UGPP no incluyó el mes de octubre de 2013, desconociendo que la liquidación de intereses se realiza diariamente hasta el día efectivo del pago, además la entidad alega que el cálculo se realizó teniendo en cuenta el periodo de liquidación de Cajanal, así como los parámetros y

procedimientos establecidos internamente para la definición de la tasa de interés conforme a las directrices de la entidad; parámetros que no coinciden con los aplicados en legal forma por el Despacho en la liquidación realizada en providencia del 28 de julio 2022, razón por la cual no hay lugar a reponer el auto recurrido por este argumento.

2.2. Respecto a las excepciones propuestas por la UGPP.

La UGPP propuso las excepciones de inexistencia del demandante o del demandado; incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado; no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar; y no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, argumentando que aunque el Despacho reconoció a la señora Bertha Isabel Ruiz Peña como sucesora procesal, lo cierto es que para que la entidad realice el pago, debe aportarse escritura pública o sentencia de sucesión por parte de los interesados.

Al respecto, el Despacho encuentra que no hay lugar a declarar probadas las excepciones planteadas por la entidad ejecutada, teniendo en que mediante auto del 28 de julio de 2022⁵, se reconoció a la señora Bertha Isabel Ruiz Peña, como sucesora procesal del señor Benjamín de Jesús Sánchez Granados (Q.E.P.D.), quien actuaba como parte ejecutante, por lo que no se configura la alegada inexistencia del demandante, ni la indebida representación del demandante, ni la falta de los litisconsortes necesarios, pues la figura de la sucesión procesal consagrada en el artículo 68 del Código General del Proceso, permite la alteración de las personas que integran las partes procesales y opera por ministerio de la ley cuando se encuentra demostrada la condición de cónyuge, albacea con tenencia de bienes o de heredero del sujeto procesal fallecido.

En cuanto a la excepción de no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, es importante precisar como se indicó en providencias anteriores, que con la solicitud de sucesión procesal presentada por el apoderado de la parte ejecutante, se aportó copia de la Resolución No. RDP 021067 de 18 de agosto de 2021, a través de la cual la UGPP reconoció la pensión de sobrevivientes que devengaba el causante, a la señora Bertha Isabel Ruiz Peña, documento que demuestra que, en sede administrativa, quien solicitó ser tenida en este proceso como sucesora procesal, se le reconoció la prestación por concurrir como compañera permanente, prueba que también fue tenida en consideración por el Despacho para reconocer a la señora Ruiz Peña, como sucesora procesal en el presente asunto.

Ahora bien, en el presente asunto el señor Benjamín de Jesús Sánchez Granados, quien fue favorecido con la sentencia judicial que sirve de título ejecutivo, falleció el día 28 de marzo de 2021, de manera que el crédito que se reclama a través del proceso ejecutivo de la referencia, pasó a integrar su masa hereditaria de acuerdo con el artículo 1012 del Código Civil.

⁵ Expediente electrónico archivo: 009. AUTO RESULEVE SOBRE SOLICITUD DE SUCESIÓN PROCESAL

En ese orden de ideas, el fallecimiento del ejecutante no es impedimento para continuar con el proceso pues, el crédito que pretende cobrarse ejecutivamente se incorporó a la masa hereditaria del señor Sánchez Granados, y el mandamiento de pago se libró a favor de la masa sucesoral del mismo, para que una vez surtido el trámite de sucesión, sea pagado a quienes acrediten tener derecho a reclamarlo, de manera que la entidad puede realizar el pago a través de depósito judicial y posteriormente el juzgado autorizará la entrega del título a quienes acrediten ser los beneficiarios.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto de 28 de julio 2022, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, ingrese el expediente al Despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 31cde8b7118f47f2213c1dcde699c117900841ffc4429ea61540543081459c2

Documento generado en 18/10/2022 11:37:11 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>